

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO CINCUENTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO: 11001 – 4003 - 054 – 2017-00837-00
DEMANDANTE: **BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**
CAUSANTE: **NANCY STELLA GARCÍA DURAN**
PROCESO: **EJECUTIVO**
TRÁMITE: **SENTENCIA**

Procede el Juzgado a dictar sentencia, siendo la oportunidad procesal para ello y no observándose causal de nulidad capaz de invalidar la actuación.

I. ANTECEDENTES

1.1 Las pretensiones

La sociedad demandante **BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**, a través de apoderado solicitó que se librara orden de pago a su favor y en contra de la señora **NANCY STELLA GARCÍA DURAN**, por la suma de \$30.011.300,00, correspondientes al capital contenido en el pagaré No. 1220857, además por los intereses moratorios liquidados sobre el capital contenido en el pagaré base de la ejecución desde la fecha de exigibilidad de la obligación y hasta que se hiciera efectivo el pago total.

1.2. Los hechos que fundamentan las pretensiones

Para sustentar estas súplicas, afirmó que la señora **NANCY STELLA GARCÍA DURAN** suscribió a del **BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**, un pagaré el pagaré No. 1220857.

Que como valor de la obligación total, declarado y exigible a partir del 19 de diciembre de 2016, corresponde a la suma de \$30.011.300.00, que la demandada adeuda a la entidad demandante.

Que la parte demandada incumplió con los pagos acordados en el pagaré base de la ejecución, y se encuentran en mora desde el día 19 de diciembre de 2016. Los plazos se hayan vencidos y el deudor las obligaciones a su cargo.

II. DESARROLLO PROCESAL

Cumplidos los presupuestos legales, en auto del 2 de octubre de 2017 (fl 17), este Despacho libró la orden de pago correspondiente conforme lo solicitado y conforme al contenido del pagaré presentado como base de la ejecución, además ordenó notificar a la parte pasiva, en virtud de lo dispuesto en los artículos 290 a 293 del Código General del Proceso.

De la orden de pago, la demandada **NANCY STELLA GARCÍA DURAN** se notificó a través de Curador Ad Litem quien en tiempo, procedió a contestar la demanda proponiendo las siguientes excepciones de mérito, i) La acción ejecutiva no presta merito ejecutivo, por carencia ininterrumpida de endosos

y ser el demandante un tenedor ilegítimo; ii) la acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo, pues no se cumplió con el artículo 665 del Código General del Proceso; iii) La acción ejecutiva no es exigible por no dar el demandante cumplimiento al artículo 692 del código de comercio; iv) La acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo por configurarse la prescripción del pagaré a la vista; v) La acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo porque no se le hicieron los requerimientos a la parte demandada; vi) La acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo por faltar uno de los presupuestos del artículo 621 del Código de Comercio; vii) la acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo por ocultar al demandante los pagos con las anotaciones cartulares; viii) la acción ejecutiva no es exigible por pretender cobrarse intereses de mora, que no fueron pactado, configurándose un indebido cobro de intereses; ix) El demandado por tratarse de “Banco” no entero a la demandada de la proyección del crédito durante su trayectoria y; x) La acción ejecutiva no es exigible por no dar al demandante cumplimiento al artículo 694 del Código de Comercio; cuya argumentación se tocará en la parte motiva de este fallo.

Una vez descrito el traslado de las excepciones de mérito propuestas, mediante auto de fecha 7 de mayo de 2021, el Despacho, reprogramó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 443 del Código General del Proceso.

En la mentada audiencia, luego de haberse surtido las etapas que disponen los artículos 372 y 373 ejusdem, el Juzgado, dispuso dictar la presente sentencia por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la dicha data.

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. Sea lo primero decir, que surtido el trámite pertinente, es procedente dirimir de fondo el litigio, puesto que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos en el presente proceso y, además no se observa causal de nulidad que pueda invalidar la actuación surtida.

3.2. Ahora bien, en lo que toca a los presupuestos de la acción se tiene que se ejerce una acción cambiaria directa derivada del pagaré No. 1220857, suscrito por la demandada NANCY STELLA GARCÍA DURAN a favor del BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., que en su validez y forma reúne todas las condiciones a que se refieren los artículos 619, 620, 621, 622, 625 a 627 y 709 a 711 del Código de Comercio y artículo 422 del Código General Del Proceso.

Lo anterior ateniendo que, el artículo 422 del Código General del Proceso, señala que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.

De la norma en comento se deriva, además, que los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.

Y las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara -es decir, que no dé lugar a equívocos como cuando están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan-, expresa -esto es que en la redacción misma del documento aparece nítida y manifiesta la obligación- y exigible -lo que ocurre cuando su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, o que estándolo, la misma ya acaeció.

Así, cuando el título ejecutivo consta a su vez en un título valor, este además debe satisfacer los requisitos generales de todo documento cartular que se encuentran contemplados en el artículo 621 del Código de Comercio: **(i) la mención del derecho que en el título se incorpora, y (ii) la firma de quién lo crea**, amén de los que de manera concreta exige la reglamentación mercantil para el instrumento en específico. En tratándose de pagaré, **reza el canon 709 del Estatuto Mercantil que aquellos deben contener; (i)** La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; **(ii)** El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago; **(iii)** La indicación de ser pagadero a la orden o al portador; y **(iv)** la forma de vencimiento.

3.3. En consecuencia, el Despacho dispone a dar trámite a las excepciones de méritos propuestas por la parte demandada a través de Curador Ad Litem, las cuales serán abordadas por grupos y en conjunto, en razón a que su sustento guarda la misma o similar carga argumentativa. En ese entendido, se inicia por las que denominó: ***“La acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo, por carencia ininterrumpida de endosos y ser el demandante un tenedor ilegítimo”, “la acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo, pues no se cumplió con el artículo 665 del Código General del Proceso” y “La acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo por faltar uno de los presupuestos del artículo 621 del Código de Comercio,*** las cuales se basada en que el pagaré 1220857 está a favor de HELM BANK S.A. y el demandante es el BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. que al leer instrumento cartular, no contiene hoja anexa, ni al reverso del mismo de la cadena de endosos de HELM BANK S.A a el BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA, brillando por su ausencia la secuencia del endoso como la establece ley de circulación la cual encuentra interrumpida, por tanto el título valor base de ejecución no presta mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 647 y 665 del Código de Comercio. Aunado a que no contiene la firma del creador del título quien se afirma es el ***“TENEDOR LEGITIMO – PRESTAMISTA”***.

Para resolver es necesario destacar que la entidad demandante hoy Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., ha tenido reformas y cambios de razón social a través del tiempo, entre los cuales se encuentra la Fusión por medio de la cual el Banco Corpbanca Colombia S.A., absorbe a la entidad Helm Bank, mediante Resolución No. 0649 del 01 de julio de 2014, de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Bajo tal entendido, el artículo 178 del Código de Comercio, indica:

“En virtud del acuerdo de fusión, una vez formalizado, la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas, y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las mismas.

La tradición de los inmuebles se hará por la misma escritura de fusión o por escritura separada, registrada conforme a la ley. La entrega de los bienes muebles se hará por inventario y se cumplirán las solemnidades que la ley exija para su validez o para que surtan efectos contra terceros.”

En virtud de la anterior disposición, los argumentos planteados en la excepción aquí estudiada, quedan sin piso, teniendo en cuenta que, cuando

se trata de fusión la entidad adsorbente que en este caso en particular es el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., adquiere todos los derechos y obligaciones pertenecientes a la entidad adsorbida, que en este asunto es la entidad Helm Bank S.A., lo anterior sucede de manera automática y sin que en la norma que lo regule, mencione que dichos derechos deben transferirse a través de la figura del endoso.

En este sentido la H. Corte suprema de Justicia en sentencia del 25 de julio de 2019¹, señaló:

“ 7.4.3. Otra función de relevancia a cargo de la Superintendencia Bancaria – hoy Financiera - es la relacionada con las autorizaciones que se imponen para efectos de la realización de los acuerdos de fusión entre entidades financieras; acuerdos mediante los cuales una entidad se disuelve sin liquidarse, para ser absorbida por otra, ora para crear una nueva, indicando el citado Decreto 663 de 1993 en sus artículos 56 y subsiguientes el procedimiento a seguir para ese fin, y los efectos que el mismo tiene dentro del patrimonio de las entidades que intervienen en este. El artículo 60 numeral 3 dispone al respecto:

«3. Efectos patrimoniales de la fusión. Una vez formalizada, la fusión tendrá los siguientes efectos:

a. La entidad absorbente o la nueva adquiere de pleno derecho la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de las entidades disueltas, sin necesidad de trámite adicional alguno.

b. La participación en filiales, inversiones y oficinas que posea la entidad disuelta ingresará al patrimonio de la absorbente, o de la nueva, para lo cual no se necesitarán autorizaciones especiales.

c. Los negocios fiduciarios, los pagarés, las garantías y otras seguridades otorgadas o recibidas por las entidades disueltas, se entenderán otorgadas o recibidas por la entidad absorbente, o la nueva, sin que sea necesario trámite o reconocimiento alguno. (Negrillas ajenas al texto).

(...)

En virtud de los acuerdos de fusión de las entidades financieras se da un traslado patrimonial y los pagarés que se hubieran otorgado en favor de las entidades que con ocasión de la misma quedan disueltas, se entenderán otorgados a la absorbente o la nueva, según el tipo de fusión autorizada, de manera que esta última por causa de ello adquiere la calidad de tenedora legítima de dichos títulos.” (Subrayado propio)

Por otra parte, frente a la firma echada de menos como requisito, basta memorar que frente al pagaré los requisitos se encuentran contenidos en el artículo 709 y siguientes del Código de Comercio, en el cual existe una persona denominada otorgante, que es alguien que promete pagar una suma determinada de dinero a otra persona denominada beneficiario o portador. artículo que a la letra reza:

“Requisitos del pagaré. El pagaré debe contener, además de los requisitos que establece el Artículo 621, los siguientes:

- 1) La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero;*
- 2) El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago;*
- 3) La indicación de ser pagadero a la orden o al portador, y*
- 4) La forma de vencimiento.”*

Revisado el documento aportado con la demanda como fundamento de la ejecución –pagaré-, observa el Despacho que cumple con los requisitos de orden general y especial que señala el legislador comercial, puesto que contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero \$30.011.300, por capital, así como señala de manera precisa quien es el obligado cambiario que no es otra que NANCY STELLA GARCÍA DURAN ,

¹ Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de julio de 2019 radicado Radicación n° 11001-31-03-031-2010-00205-03 M.P Margarita Cabello Blanco

indicando que sería pagadera a favor de HELM BANK.- el 19 de diciembre de 2016; además, contiene la mención del derecho que en él se incorpora, esto es, “PAGARÉ”, el cual por demás no fue desconocido ni tachado de falso.

Así mismo, nótese que este instrumento cartular goza de las características de incorporación, literalidad y autonomía, por virtud de las cuales, el derecho por el que se crea el título, se incorpora al mismo (art. 619 C. de Co.) y éste lo representa –al derecho- en íntima unión, sin que sea necesario acudir al negocio jurídico que le dio origen, bastando el solo título. Así mismo, el derecho incorporado al título es únicamente el que allí reza de manera literal, sin que sea necesario ni pertinente acudir a interpretaciones más o menos alambicadas para deducir el monto, la naturaleza, el alcance o los pormenores del fraccionamiento de las prestaciones derivadas del derecho incorporado, lo que preserva tanto al tenedor como al suscriptor de la discusión si el derecho es igual o diferente o menor o mayor del allí consagrado, (art. 626 C. de Co.) por virtud de situaciones o acuerdos anteriores o posteriores a la creación, no consagrados en el cuerpo del mismo.

En este contexto, carecen de sustento las excepciones estudiadas, pues, tiene legitimación en la causa por activa el Banco ejecutante, en razón a que, cumple con la calidad de tenedor legítimo del título báculo de la acción, evidenciándose que la Curadora confunde la firma del obligado cambiario con el tenedor legítimo, caso en el cual para este último no se exige que suscriba el título, máxime si se tiene en cuenta que su tenencia operó por ministerio de la ley, pues se insiste que la misma se dio en razón de la fusión por absorción, de ahí que el instrumento cartular no circuló cambiariamente conforme al 647 del C de Co.

3.4. En lo que tiene que ver con las excepciones que la parte demandada denominó **“La acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo porque no se le hicieron los requerimientos a la parte demandada”, “La acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo por configurarse la prescripción del pagaré a la vista”, “La acción ejecutiva no es exigible por no dar el demandante cumplimiento al artículo 692 del código de comercio” y “la acción ejecutiva no es exigible por pretender cobrarse intereses de mora, que no fueron pactado, configurándose un indebido cobro de intereses”** las cuales se fundamentan en que el título base de la ejecución es un pagaré a la vista porque solo tiene una fecha de vencimiento y no se pactó su pago en cuotas mensuales durante determinado, caso en el cual al no dar cumplimiento la ejecutante al artículo 692 no es exigible. Asimismo, indica que, la presentación para su pago debió hacerse dentro del año que sigue a la fecha del título que fue suscrito en mayo 3 de 2013, transcurriendo más de 3 años a la presentación de la demanda, la cual fue presentada para su cobro judicial en septiembre 5 de 2017 por tanto no es exigible. A su vez, señala que conforme a la literalidad del pagare base de ejecución, no se pactó el pago cobro de intereses de mora y que tampoco el deudor renunció expresamente a que no se le hicieran los requerimientos del artículo 1608, por tanto, debió haber sido previamente reconvenida en la mora, para poder hacer exigible el título valor, al no existir renuncia del demandado, no puede predicarse alegremente por el demandante que si los hizo o de forma telefónica sin demostrar con prueba alguna que ello sea cierto pues se ignora el paradero de la demandada.

En lo atinente al requisito forma de vencimiento del pagaré concuerda con el supuesto de la exigibilidad que reclama el título ejecutivo, empero si el mismo contiene más de una enerva el derecho incorporado en aquél - pagaré- y la obligación contenida en este -título ejecutivo-, porque carece de la fuerza suficiente para exigirle el cumplimiento al deudor, dado que no existiría certeza de la época exacta en la cual deba cumplirse la prestación debida. En este entendido las formas de vencimiento del pagaré son las mismas de la letra de cambio por expresa remisión que hace el artículo 711

del Código de Comercio, autorizándose así **una cualquiera** de las previstas en el artículo 673 ibídem, a saber: a) a la vista, b) a un día cierto después de la vista, c) a un día después de la fecha, d) **a un día cierto determinado**, e) a un día cierto no determinado y f) **con vencimientos ciertos y sucesivos**.

Es decir, ello constituye requisito indispensable en orden a fijar el término exacto de la existencia cambiaria del título, precisando el momento en que se torna exigible la obligación, por resultar obvio que para su cabal determinación ha de procederse de acuerdo con lo literalmente pactado en dicho cartular, por lo que corresponde entonces analizar cómo se autorizó cumplir con esta exigencia. Ante la importancia que adquiere este interrogante en el sub-lite y teniendo presente el rigor cambiario expuesto, sólo pueden ser admitidas **una cualquiera** de las formas citadas, de modo que, si en el título valor no se coloca o se imponen dos o más de ellas alternativas o sucesivamente, salvo el evento exactamente previsto en el numeral 3º del artículo 673 ibídem, o se utiliza una diferente de las expresamente autorizadas, o no se inserta ninguna, ello acarrea la inexistencia del título.

En otros términos, con el fin de evitar cuestionamiento alguno acerca de la fecha de vencimiento, sólo queda a las partes escoger una de las opciones permitidas por el artículo 673 del Código de Comercio, plasmando únicamente la convenida, sin que por lo mismo se pueda en manera alguna no poner ninguna de ellas, como tampoco otra no permitida y mucho menos entre las autorizadas varias, pues, además de quebrantar los principios que orientan el derecho cambiario harían ambigua la exigibilidad del título valor. Examinado con detenimiento el instrumento báculo de ejecución –pagaré, destaca el Despacho que la parte pertinente del mismo, en el cual se indicó: “VENCIMIENTO. Diciembre 19 de 2016” (fl. 10). De la simple lectura juiciosa y cuidadosa efectuada a dicho legajo se desprende de manera fehaciente que en el título valor se insertó un día cierto determinado, llevando al traste el argumento propuesto en la excepción analizada.

Con respecto de los requerimientos extrañados por la Curadora Ad Litem de la demandada, ha de decirse que en el contenido del título valor pagaré aportado como base de la ejecución, la demandada se obligó a pagar en caso de mora, intereses a la tasa máxima legal permitida y conforme a la respectiva carta de instrucciones se evidencia que en el literal (a) se pactó que dicho pagaré debería ser llenado sin necesidad de previo aviso, requerimiento o reconvencción en el evento, en los cuales se considerara vencido el plazo, aspecto que en el presente asunto se encuentra cumplido teniendo en cuenta el incumplimiento incurrido por la pasiva.

Respecto de la prescripción, ha de recordarse que el artículo 2513 del Código Civil señala que aquel “*que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio*”. Al paso de lo anterior, el precepto 2535 de la misma codificación indica que la prescripción que extingue las acciones o derechos de otros, exige sólo el transcurso de cierto tiempo que en cada caso es fijado expresamente por el legislador. No obstante, si bien el transcurso del tiempo implica el acaecimiento del fenómeno prescriptivo; el artículo 2539 del Código Civil, también señala que aquel puede interrumpirse de manera *natural o civil*; la primera por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, o tácitamente; y la segunda por la presentación de una demanda ante la jurisdicción correspondiente.

Ahora, en tratándose de prescripción de la acción cambiaria, predicable única y exclusivamente de títulos valores, el artículo 789 del Código de Comercio indica que es de tres años, contados a partir del vencimiento de la obligación. Al paso de lo anterior, y frente a la interrupción de la prescripción de manera civil, establece el artículo 94 del C.G.P.:

“la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el mandamiento ejecutivo, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término –expresa in fine la norma- los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.”

Entonces, aplicados los anteriores criterios legislativos a la obligación que aquí se ejecutan, representadas en el pagaré base de recaudo, se tiene que la excepción de prescripción está destinada al fracaso. Lo anterior, por cuanto, aun cuando el mandamiento de pago se notificó la ejecutada, señora Nancy Stella García Duran, fuera de la oportunidad establecida en el artículo 94 del Código General del Proceso, lo cierto es que dicho acto de enteramiento se cumplió antes de que se configurara el término de prescripción. Debe tenerse en cuenta que la entidad bancaria pretende el pago de un pagaré cuya fecha de exigibilidad data del 19 de diciembre de 2016, entonces, el trienio se cumplió el 19 de diciembre de 2019, fecha para la cual ya se había notificado el mandamiento de pago a través de curador ad litem, lo cual valga decirse, fue el 8 de julio de 2019.

Ahora bien, en punto del cobro indebido de intereses baste con decirse que causa extrañeza para el despacho las argumentaciones expuestas en punto de esta excepción habida cuenta que contrario a lo manifestado por la auxiliar de la justicia, las partes sí pactaron el cobro de intereses de mora, según se desprende del tenor literal del documento arrimado como base de la ejecución, cuestión diferente es que no se haya establecido la tasa, pues en todo caso dicha falencia se encuentra regulada por el canon 884 del Código de Comercio que expresamente señala:

“Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.”

Frente a este tópico la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia indicó que:

“Con todo, de haberse dado dicha circunstancia en los términos referidos por el recurrente, esto es, de apreciarse que en efecto las partes no rehusaron la posibilidad de cobrar interés por el dinero objeto del contrato de mutuo, ha de considerarse que ese pacto tácito lo máximo que genera es que en los referidos contratos de mutuo se pudiera fijar la tasa correspondiente al interés legal comercial.

(...)

4. Por último, es pertinente anotar que la relación jurídica existente entre las partes fue un mutuo mercantil, contrato respecto al cual tiene previsto la legislación que por regla general da lugar a intereses legales comerciales, de manera que la única modalidad permitida para efectos de entender que no fue pactado interés alguno o que éste se convino en una tasa inferior a la legal, es consagrar dicha cláusula expresamente en el contrato, como lo prescribe el artículo 1163 del Código de Comercio, circunstancia que, sin duda, no se dio en este evento.”²

Desde esta perspectiva, surge indiscutible que en este caso en particular nada impide que la parte ejecutante cobre los intereses de mora en la forma peticionada en la demanda y ordenada en el mandamiento ejecutivo, de tal modo que este medio de defensa tampoco se encuentra llamado a prosperar.

3.5. Por ultimo frente a las excepciones denominadas “la acción ejecutiva no presta mérito ejecutivo por ocultar al demandante los

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 27 de noviembre de 2002, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, exp, 7400.

pagos con las anotaciones cartulares” y “el demandado por tratarse de “Banco” no enteró a la demandada de la proyección del crédito durante su trayectoria” las cuales se fundamentan en que no se aportó documentación matemática financiera firmada por el revisor fiscal del Banco demandante, para establecer si el saldo a ejecutar es real o no, si es o no cartera castigada, si se efectuaron o no las provisiones y tampoco se, reflejan los abonos efectuados, por lo tanto, el capital puede ser menor al afirmado bajo la gravedad de juramento, asimismo, que con la omisión del ejecutante de aportar la proyección del crédito se incurre en una violación al debido proceso porque se obtuvo mandamiento de pago sin demostrar que cumplió con su deber legal de información del crédito al demandando.

Como se ha desarrollado hasta este punto el pagaré arrimado visible a folio 10 del plenario, en la presente litis se puede establecer fácilmente, que el mismo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles. Lo anterior, bajo los parámetros establecidos en los artículos 619, 620, 621, 622, 625 a 627 y 709 a 711 del Código de Comercio y artículo 422 del Código General Del Proceso, de ahí que el ejecutante no se encontraba obligado a arrimar los legajos echados de menos por la pasiva, pues aquí no se habla de un título complejo, de modo que bastaba con que aportara el pagaré con las características reseñadas a lo largo de esta determinación, para que, sobre él se libraré la orden de apremio como en efecto ocurrió, en tanto que, le correspondía a la pasiva demostrar que las condiciones allí plasmadas no fueron las mismas pactadas, aspecto que en todo caso brilla por su ausencia al interior de este asunto. En este entendido encuentra el Despacho que los argumentos propuestos carecen de sustento probatorio, pues, nótese que la parte demandada no arrimó ningún medio de prueba que permita determinar con el rigor que se requiere, que los valores contenidos en el instrumento cambiario, son menores o no corresponde a la obligación que se ejecuta, recuérdese que de conformidad con los artículos 1757 del Código Civil y 167 del Código General del Proceso, las partes o sujetos procesales interesados en la contienda tienen el deber de acreditar el factum en que fundamentan tanto las pretensiones como los medios exceptivos formulados, es decir, soportan, individualmente, el peso o carga probatoria para así dar idóneo respaldo a sus aseveraciones, siendo, por ello, imperioso acudir a cualquier medio a que alude el artículo 165 de la última obra citada, logrando de esa manera que el operador judicial, previo valoración, dirima el conflicto sometido a su consideración. *Resultando insuficiente para tal propósito su simple manifestación, por razón que a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea prueba de lo que afirme, tal como lo ha precisado la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil:*

“es verdad que, con arreglo al principio universal de que nadie puede hacerse su propia prueba, una decisión no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus aspiraciones. Sería desmedido que alguien pretendiese que lo que afirma en un proceso se tenga por verdad, así y todo sea muy acrisolada la solvencia moral que se tenga. De ahí que la Corte Suprema de Justicia haya dicho en un importante número de veces... que ‘es principio general de derecho probatorio y de profundo contenido lógico, que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba. Quien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del Juez. Esa carga... que se expresa con el aforismo onus probandi incumbit actori no existiría, si al demandante le bastara afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no más quedar convencido el Juez”³

En conclusión, se declararán infundadas las excepciones de mérito propuesta por la parte demandada, de suerte que se ordenará seguir adelante con la ejecución, en la forma señalada en el mandamiento de pago.

IV. DECISIÓN

³ Sent. de 12 de febrero de 1980 Cas. civ. de 9 de noviembre de 1993. G.J. CCXXV, pag. 405

Por lo expuesto, el Juez Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá D. C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

V. RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar **NO PROBADA** las excepciones de mérito propuestas por parte demandada, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución en contra la parte ejecutada, conforme a los términos del mandamiento de pago.

TERCERO: PRACTICAR la liquidación del crédito, dando cumplimiento al artículo 446 del Código General del Proceso.

CUARTO: ORDENAR el avalúo y remate de los bienes embargados y sobre los cuales pesa gravamen hipotecario.

QUINTO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandada. Por secretaria procédase a liquidar las costas procesales, incluyendo como agencias en derecho la suma de **\$ 1.501.000.00 M/CTE.**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

JORGE ENRIQUE MOSQUERA RAMÍREZ
JUEZ

Firmado Por:

JORGE ENRIQUE MOSQUERA RAMIREZ
JUEZ

JUZGADO 054 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-
BOGOTÁ, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

1988db5386ae807fedb7048d6d2df2ef2b6014da5ab41c9fb990955917f48bf5

Documento generado en 28/07/2021 08:56:36 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>